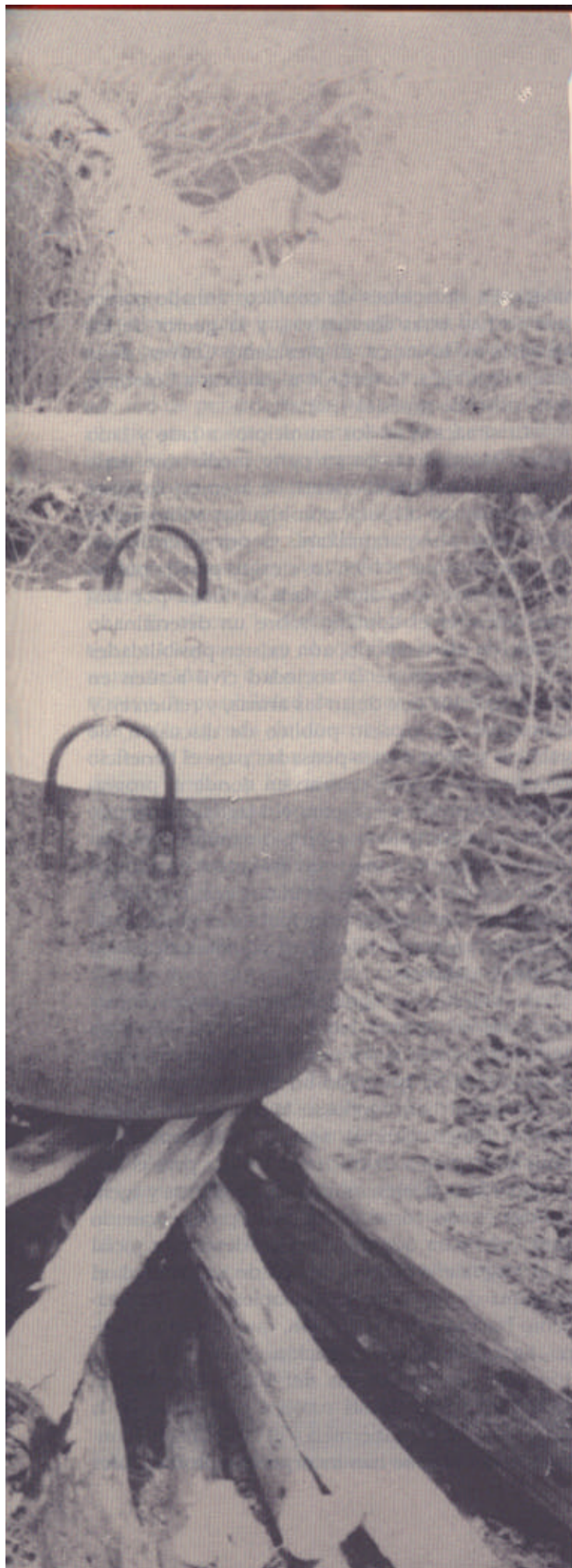






EL PDPMM: DESARROLLO Y PAZ “EN CALIENTE”

MAURICIO ROMERO¹

1 Investigador asociado del CINEP y del IEPRI.



urante los últimos años han proliferado en Colombia diversas modalidades de "laboratorios de paz". De una parte están las zonas de despeje militar, como San Vicente del Caguán y municipios circundantes en el suroriente del

país, con las cuales se ha buscado facilitar las conversaciones entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno del presidente Pastrana desde finales de 1998. También están las regiones despejadas a sangre y fuego por autodefensas y paramilitares, como el noroeste, para devolver seguridad a propietarios y evitar la coerción de la guerrilla. En cada caso es notable la jurisdicción militar que de hecho se les ha otorgado a fuerzas armadas diferentes a las constitucionales, así se diga lo contrario. Ambas modalidades son avaladas, bien por omisión o por acción, por las autoridades centrales, aunque hay que reconocer que el despeje en el suroriente es una situación excepcional, que no por ello deja de ser reveladora.

Entre estos dos tipos de despeje se ubican diferentes territorios en donde con grados variables de enfrentamiento o de consolidación, uno u otro bando busca constituirse como fuerza dominante. Estas situaciones ocurren en lo que se ha denominado territorios en disputa. El "imperio de la ley", mientras tanto, o la soberanía de la autoridad central, busca su espacio en los resquicios que deja el enfrentamiento en las zonas rurales, o en las grandes ciudades, en donde las contravenciones a la convivencia asumen mayoritariamente otras formas. Lo común entre esas dos clases mencionadas de despeje es la arbitrariedad a la que quedan sometidas las poblaciones que no son reconocidas como afiliadas o leales al bando que domine en ese momento. Para ellas, las posibilidades son el desplazamiento, la permanencia con derechos civiles y políticos limitados (permanecer en silencio y sin ninguna actividad pública) o, en casos extremos, la muerte. Una última posibilidad es la asimilación paulatina a la fuerza reinante. El derecho y la democracia no son cartas para jugar en esta partida de poder

militar. En situaciones de conflicto armado parece que no hay otras alternativas, y la guerra de los Balcanes así lo indica. El presidente Chávez, de la vecina república, lo recordó al calificar a Colombia el "Kosovo de América Latina".

La situación en los municipios a lado y lado del río Magdalena, en su parte media que tiene como eje a Barrancabermeja, se asemeja bastante a una zona en disputa, con algunas subregiones dominadas por paramilitares o por guerrilleros. Esto significa que si bien los riesgos para la población civil son más altos, dada la lucha por ampliar/defender el dominio sobre un determinado espacio de ese territorio, aún existen posibilidades para que grupos de la sociedad civil actúen en esos resquicios que dejan las armas, y refuercen y mantengan un espacio público de discusión, de prácticas y de acciones pensadas para el beneficio colectivo. Es en este terreno en donde el programa de Desarrollo y Paz para el Magdalena Medio, PDPMM, está haciendo su propio camino como laboratorio de paz. Aunque en este caso, en comparación con los dos modelos anteriores, la gran diferencia es que el actor principal no es ninguno de los grupos en armas. Es más, ni siquiera existe aún, es una virtualidad.

Lo anterior no significa que no haya voluntades detrás del PDPMM, hay muchas y de diferentes tendencias, y este factor es tal vez su mayor riqueza. El PDPMM ha generado un espacio público per se, en donde han confluído la banca multilateral como el Banco Mundial, agencias de cooperación como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD; diferentes niveles, programas y agencias del estado como ECOPETROL (previo acuerdo con la USO para que invirtiera en desarrollo social en el Magdalena Medio), la Red de Solidaridad, el programa de Municipios Saludables, o el Departamento Nacional de Planeación, que con su patrocinio, ha facilitado la obtención del aval de la nación para los préstamos del Banco Mundial al PDPMM, etc.; y la Iglesia católica por medio de la Diócesis de Barrancabermeja y el CINEP. En esa confluencia también se han incorporado profesionales

líderes de la región como funcionarios y asesores del PDPMM, y más importante aún, éste ha promovido la conformación de núcleos comunitarios en los 28 municipios en los que opera, y a partir de éstos, una red de pobladores del Magdalena Medio. Ésta, aunque en proceso de consolidación, ha permitido la participación directa de grupos organizados en el ámbito local en la selección, diseño y planeamiento de los proyectos en los veintiocho municipios que incluye el Programa, hecho que se ha constituido en uno de sus mayores activos, junto con el del pluralismo político e ideológico en su interior.

En efecto, la diversidad de voces, perspectivas e intereses que se ventilan en la red de comunicación y cooperación que constituye el PDPMM, la posibilidad de poner como una prioridad en la agenda de desarrollo y paz las necesidades de los grupos y zonas más pobres del Magdalena Medio, y las reducidas posibilidades de corrupción en el manejo de los recursos, hechos difíciles de lograr en las instituciones estatales regionales manejadas por los dos partidos tradicionales, han convertido al PDPMM en una experiencia piloto para la superación de la pobreza y la construcción de la paz. Esta modalidad de asociación entre organismos de cooperación internacional, agencias estatales y grupos de la sociedad civil, incluyendo a los sectores populares como sujetos portadores de derechos, y no como clientelas, está a tono con las demandas de democratización y participación doméstica, y con las nuevas corrientes internacionales sobre desarrollo social. Éstas ya no centran toda la responsabilidad del desarrollo en el Estado, sino que abogan por una interacción positiva entre Estado y sociedad civil, a la cual llaman "sinergia" entre dos polos que antes se consideraban contradictorios.²



GARROTE, ZANAHORIA Y CONTRAINSURGENCIA

Paradójicamente, este es uno de los puntos que ha despertado mayores recelos. Esa asociación entre iglesia, Estado y agencias de cooperación internacional y financiera ha sido vista por muchos como un plan de contrainsurgencia en el Magdalena Medio, y en particular, por algunos sectores de las organizaciones guerrilleras que operan en esa región. Ya es conocida la crítica al reformismo que se asocia con el "retardo en la maduración de la condiciones de la revolución", argumento simplista que asume que a mayor pobreza mayores son las posibilidades de un alzamiento popular. De ser esto verdad, no explica por qué por ejemplo, en el Chocó, el departamento más pobre del país, no se ha producido una acción colectiva de envergadura en su historia reciente.

Otra de las visiones negativas sospecha de los proyectos productivos —que son pieza básica de la estrategia de "desarrollo humano sostenible" del PDPMM, para la cual la generación de empleo e ingresos es vital— y los considera como una "avanzada del capitalismo" en el área. Sin embargo, si se da un vistazo a algunas de las iniciativas económicas financiadas o a algunos de los proyectos sociales apoyados, el argumento parece débil, si no delirante.³ Tal vez, esa conclusión provenga de los rumores que hablan de la explotación del oro en la serranía de San Lucas por una multinacional, hecho que tendría como prerrequisito la pacificación del área mediante "garrote y zanahoria". Esto quedaría

2 Montúfar, César (1996), "Desarrollo social con sociedad civil. El espejismo de la participación en el nuevo discurso del desarrollo", en *Controversia* # 168, Cinep.

3 Comercialización de mora en la provincia de Vélez, producción de frijol en Santa Rosa del Sur, Plan forestal del valle del río Cimitarra, industrialización de arenas silíceas en Sabana de Torres, producción agroecológica de frutas en San Vicente de Chucurí, industrialización de yuca en Sabana de Torres, piscicultura extensiva en San Pablo, resignificación de la educación media en todos los veintiocho municipios del Programa, red de emisoras comunitarias del Magdalena Medio, entre muchos otros.

confirmado, además, porque desde que el Programa entró en operación en el Magdalena Medio en 1995, el avance de los paramilitares y las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, y la consolidación de las Autodefensas de Santander y el Sur del Cesar, Ausac, parecen incontenibles.

Sin embargo, las anteriores apreciaciones sobre el PDPMM dejan de lado dos aspectos que van más allá de la estrategia económica, y que además, diferencian al PDPMM de los planes comunes contra la pobreza. El primero, como se mencionó antes, sería la generación de un espacio en donde se oyen voces y propuestas alternativas, opuestas o coincidentes, según el caso, a las del gobierno, los partidos tradicionales, o los actores armados. Es lo que se conoce como un "contra-público"⁴ a la esfera ofi-

cial generada por el Estado y sus prácticas, sus proyectos y sus discursos, el cual no excluye las posibilidades de cooperación entre estos dos polos. Además, en el caso del Magdalena Medio, ese espacio comunicativo y práctico creado por el PDPMM no sólo le disputa la creación de significados y de un marco de interpretación de los hechos a los diferentes niveles y organizaciones estatales, sino también a los grupos guerrilleros, por un lado, y a los paramilitares y autodefensas, por el otro. Se podría decir que cada acción y pronunciamiento del PDPMM pretende ser una tacada a tres bandas: hay por los menos tres audiencias diferentes observando cuidadosamente su actividad.

Por otro lado, al invocar la defensa de derechos universales como los derechos humanos, la



convivencia y defensa de la vida, la satisfacción de necesidades básicas y otros puntos, el PDPMM ha vuelto a poner en la discusión regional la noción de bien común o colectivo, sin confundirlo con lo estatal, pero reconociendo la importancia de éste para su implementación y estabilización en un complejo de derechos sancionados por ley y respetados en la práctica. Es lo que se conoce como el fortalecimiento de lo público, o la segunda gran estrategia del PDPMM. Ésta también supone la lucha contra la corrupción en el manejo de los recursos públicos por las administraciones locales, que en muchos casos están "privatizadas" por las diferentes redes políticas, incluyendo las de los actores armados. De ahí que el control de las municipalidades, sobre todo cuando recauda recursos derivados de regalías, se haya convertido en uno de los puntos álgidos de la disputa armada.

El segundo aspecto que olvida el argumento contrainsurgente tiene que ver con la política de contribuir a moldear sujetos políticos autónomos y responsables frente a los problemas colectivos. Esto va de la mano con la ampliación de los canales de participación en la Constitución de 1991, en la cual las fuerzas progresistas buscaron disminuir el tutelaje bipartidista sobre las organizaciones sociales, dar oportunidad para un mayor pluralismo dentro de ellas y ampliar las posibilidades para el surgimiento de otras agrupaciones partidistas. Sin embargo, no todas las fuerzas políticas de la región se han percatado de que los diversos sectores sociales han visto en las nuevas posibilidades de participación una herramienta para avanzar sus intereses, profundizar la democracia y ejercer su autonomía de decisión electoral, objetivos difíciles de conseguir en el anterior diseño constitucional. Esas fuerzas, al permanecer anclados en el mismo esquema de pasar por encima de la institucionalidad, se han puesto en contravía de la dinámica social.

En efecto, parte de las condiciones políticas para el sorprendente avance de los grupos parami-

litares en el sur de Bolívar durante el último año y medio surgieron con el boicoteo electoral de la guerrilla, especialmente del ELN, durante las elecciones municipales de finales de 1997. Ese sabotaje impidió que candidatos con gran aceptación popular llegaran a las alcaldías o enfrentó a grupos importantes de la población con la guerrilla, como sucedió en Santa Rosa del Sur, Simití, y San Pablo, hasta hace unos años considerados baluartes políticos guerrilleros. La guerrilla desconoció decisiones sobre participación electoral que comunidades enteras habían tomado, hecho que aprovecharon sus enemigos para denunciar su autoritarismo y presentar la llegada de los paramilitares como una oportunidad para el ejercicio de la libertad. Un sentimiento similar surgió luego del éxodo campesino del sur de Bolívar hacia Barrancabermeja a finales del año pasado, debido al férreo manejo que se le dio a la organización de los marchistas durante su permanencia en el casco urbano de Barrancabermeja.

En suma, si bien las nuevas posibilidades de participación han sacudido a las organizaciones sociales del tutelaje bipartidista, permitiendo una mayor pluralidad y autonomía en su interior, también han permitido cuestionar las formas de ejercicio del poder por parte de la guerrilla. Sobre los errores y excesos de ésta los paramilitares y sus aliados han logrado crear un público que coincide con su propuesta o con puntos de ella, así no estén de acuerdo con el terror de sus métodos. Si bien el uso de la violencia en contra de la población civil sospechosa de auxiliar a la guerrilla, usualmente la más pobre, ha sido un rasgo de las operaciones paramilitares, no hay que olvidar que grupos políticos y sociales concretos se han beneficiado de los efectos de ese terror, creando una base política poderosa, que por el hecho de ser silenciosa, no quiere decir que no opera.

Además, la ambigüedad, por decir lo menos, de las autoridades armadas frente al fenómeno paramilitar ha contribuido a darle legitimidad y ha puesto a las fuerzas armadas en el centro de los

4 Fraser, Nancy (1997): "Pensando de nuevo la esfera pública", en *Justicia Interrupida*, Uniandes.

desarrollos de la política local en esta región. En el sur de Bolívar, por ejemplo, los grupos cuyas decisiones de participar en las elecciones de 1997 con candidatos propios fueron desconocidas por la guerrilla, encontraron en el ejército un aliado poderoso y en los paramilitares una organización armada dispuesta a darles protección. A cambio, éstos obtuvieron el apoyo social y político necesario para organizar su presencia armada permanente en el área.

Lo paradójico es que dada la configuración del campo de fuerzas y la forma de su polarización, la dinámica terminó por ubicar a fuerzas políticas y sociales progresistas y con contradicciones o diferencias con la guerrilla, en el campo paramilitar. El caso típico es el de Santa Rosa del Sur, municipio que se ha convertido en el puntal de la oposición política en contra de una zona de despeje para el ELN en el sur de Bolívar. Algunos sectores de izquierda señalan al PDPMM como responsable, en parte, de esa situación. Sin embargo, esto hubiera ocurrido con o sin presencia del PDPMM, dada la posición de esa agrupación guerrillera frente a las elecciones de 1997, la cual chocó con una mayor capacidad política y de decisión de numerosos grupos locales. Lo que quedó claro es que el apoyo a la autonomía de los sujetos sociales no es de por sí progresista o conservadora, aunque sí demuestra un mínimo respeto por ellos. La dirección que tome esa afirmación individual y colectiva está en relación con las contradicciones que se originen en el propio contexto. Las decisiones son en últimas responsabilidad de los propios sujetos.



LOS "PARAS": UN OBSERVADOR PERMANENTE Y VIGILANTE

¿Cómo hace el PDPMM para operar con un proyecto medianamente progresista y en una región infestada de paramilitares y autodefensas, supuestamente la manifestación de la ultraderecha del país? Esta es una pregunta para la cual no hay una res-

puesta satisfactoria. Más allá de las conversaciones y relaciones públicas a todo nivel y con multitud de personajes de todas las procedencias que han hecho viable el Programa, está la situación de pobreza del sur de Bolívar, por ejemplo, o la crisis económica por la que pasan la economía agroindustrial del sur del Cesar, o la de la pequeña y mediana producción agraria de la provincia de Mares, en donde se encuentran El Carmen y San Vicente de Chucurí, reconocidos fortines de las autodefensas. Esa situación hace que los recursos que maneja el PDPMM no sean una posibilidad despreciable en una época de vacas flacas. Hasta el momento, las veintidos iniciativas económicas y sociales definidas por los diferentes núcleos municipales y que han alcanzado un grado de maduración aceptable, suman un monto total cercano a los 860 millones de pesos. Del análisis de esos proyectos se podría deducir, que como mínimo un 50% de los recursos han ido a municipios considerados como cercanos a la influencia de las autodefensas y de los paramilitares.⁵

Sin embargo, el desplazamiento de los funcionarios del Programa en el área requiere de un complejo dispositivo de mensajes y razones que hagan saber que durante determinados días, a unas horas determinadas, un número más o menos sabido de personas se van a desplazar a uno u otro municipio, a visitar alguien conocido del lugar. Los medios de transporte son vigilados permanentemente, en especial el cruce de lanchas de una ribera a otra del río, en donde los lancheros y sus ayudantes son piezas claves de una compleja red de información e inteligencia. Hasta el presente no ha habido ningún incidente entre el PDPMM y estos grupos, pero la agudización del conflicto y, todo parece indicar, la determinación de los paramilitares de darle un vuelco político a Barrancabermeja similar al ocurrido en el Urabá antioqueño, harán de las condiciones de operación del Programa una situación aún más riesgosa.

En los veintiocho municipios del PDPMM están organizados tres grupos de paramilitares y autodefensas bien diferenciados. Un primer grupo que tiene como eje a Puerto Berrío (Antioquia) y tiene alcance hasta Cimitarra y Puerto Araújo (Santander).

Este tiene una relación cercana con latifundistas y ganaderos y es tal vez el pionero en la autodefensa armada frente a la guerrilla en el país. El segundo grupo localizado en El Carmen y San Vicente de Chucurí, es tal vez el que más se acerca a la imagen de autodefensa campesina sin mayores pretensiones de expansión más allá de sus límites. El tercer grupo, ubicado en el sur del Cesar es el más nuevo y agresivo, y logró consolidarse como Autodefensas de Santander y el sur del Cesar, AUSAC, desde 1996. Las AUSAC se declararon como autoras de la masacre de mayo de 1998 en Barrancabermeja, hecho que ha iniciado una nueva época en la historia de esta ciudad. Hasta esa fecha, el centro petrolero del país se consideraba como un bastión de las diferentes corrientes de la izquierda legal y revolucionaria, mito que los paramilitares han venido demoliendo lentamente desde el año pasado. Las AUSAC han sido la punta de lanza de la ofensiva paramilitar en el sur de Bolívar desde 1997, y por su accionar se deduce que tienen estrecha relación con las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, comandadas por Carlos Castaño.

Hasta el momento, el PDPMM no ha recibido una señal de clara desconfianza de parte de paramilitares y autodefensas, aunque persiste el rumor, el cual se intensifica según las conveniencias de quien lo difunde, de que puede estar creando condiciones propicias para ampliar el campo de acción de la guerrilla. La defensa de la vida, de los derechos humanos, de la libertad de asociación, expresión y movilización, y el apoyo técnico a las mesas de negociación entre el Gobierno y los representantes del éxodo campesino a Barrancabermeja en 1998, lo han ubicado claramente en el campo de potenciales "objetivos militares" por parte de los que identifican estos temas con la "parasubversión". Sin embargo, el mayor riesgo parece que puede venir en el futuro de los políticos locales, quienes han visto que los efectos del Programa los confronta con su propia corrupción.

5 PDPMM, *Boletín Informativo Interno* #7, marzo 1999.



POLÍTICOS TRADICIONALES: EL PDPMM NOS DESLEGITIMA

En efecto, existe un malestar de las administraciones locales frente al PDPMM. Este fenómeno es más acentuado en el departamento de Bolívar, en donde desde la gobernación, haciendo eco de algunos de los políticos locales del sur del departamento, se habla de la "deslegitimación del estado" — leáse de los políticos— por parte del PDPMM. Esto no hace referencia al contraste entre la gestión de recursos y proyectos por parte del Programa y la de las administraciones locales, en este caso las de Bolívar. La queja se origina en los recursos que maneja el Programa, los cuales deberían estar en los presupuestos municipales bajo la responsabilidad de los alcaldes, según el criterio de algunos de los políticos locales. Este hecho, el de tener un ente paralelo con capacidad de inversión es el que los "deslegitima", y no el contraste entre la capacidad de gestión entre uno y otro.

Sin embargo, a excepción de los municipios de Santa Rosa del Sur, San Pablo, Regidor y Simití, todos en el sur de Bolívar, la subregión más pobre de las que cubre el PDPMM, la relación entre éste y las administraciones locales no ha sido muy cercana. Parece ser que la imposibilidad de convertir las inversiones del PDPMM en votos no hace muy atractivo el acercamiento para las alcaldías. Por la misma razón, la ausencia de un interés electoral directo o explícito por parte del Programa, no ha hecho de ese nexo una prioridad en sus actividades. Con todo, la crisis política y de liderazgo por la que atraviesan algunos de los municipios de la zona, hacen necesaria una mayor atención en este frente. El caso más protuberante es el de Barrancabermeja, en particular por las posibles repercusiones que pueda tener.

En la actualidad, el sistema político local de esta ciudad pasa por una crisis aguda. El liberalismo, fuerza mayoritaria del municipio, está dividido y en una pugna interna sin precedentes. La línea oficial del Frente Independiente Liberal, Fila, fundado por el ex candidato presidencial Horacio Serpa en los años 70, ha sido derrotada consecutivamente tres veces en las elecciones para alcaldes, y está en una campaña sin tregua de reconquista de sus mayorías. Las denuncias por corrupción de la actual administración de Elkin Bueno han caldeado aún más los ánimos, y el faccionalismo presente en los dos partidos tradicionales, sobre todo en el Liberal, no hacen fácil conformar una coalición que ejerza un liderazgo.

Mientras tanto, las pretensiones de las AUSAC y de las AUC por darle un vuelco político a la ciudad, hacen pensar en una agudización de la violencia en contra de la población civil, hecho que para evitarse requeriría de un liderazgo y acuerdo político amplio, el cual no se vislumbra hasta el momento. Hay que recordar que los regímenes políticos actuales en Urabá y Córdoba se conformaron en medio de una crisis y faccionalismo político similar al de la Barrancabermeja de hoy. En esas regiones del noroeste del país el fraccionamiento partidista de los años 80, entre otras cosas, hizo imposible organizar alternativas de solución política diferentes a las que finalmente terminaron por imponerse.⁶



JUEGO LIMPIO Y COOPERACIÓN

Existe una gran desconfianza frente al Estado central y sus aliados locales en el Magdalena Medio. La explotación de recursos naturales como el petróleo y el gas no ha tenido los efectos regionales esperados y prometidos, y la riqueza del subsuelo de esta zona no ha ofrecido progreso a su gente, debido al modelo de economía extractiva utilizado y a la ausencia de encadenamientos productivos sólidos con la región.⁷ Además, la forma como se ha enfren-

tado la protesta social ha contribuido a moldear unas identidades de resistencia, las cuales han surgido de los grupos que se encuentran en posiciones devaluadas o estigmatizadas por la lógica del poder.⁸ Este fenómeno es particularmente acentuado en Barrancabermeja, como resultado del conflicto laboral alrededor de la Unión Sindical Obrera, USO, y la historia de violencia política y el asesinato de líderes sindicales y populares, en donde fuerzas de seguridad han estado implicadas.⁹

La masacre de mayo de 1998 por parte de las AUSAC, lo mismo que la ofensiva paramilitar en el sur de Bolívar, en donde la desprotección de la población civil por la fuerza pública ha sido evidente, han reforzado ese sentimiento de sospecha de amplios sectores de la población frente a las autoridades en general. En muchos casos, éstas son vistas no como una garantía, sino como otro factor más de riesgo. Para muchos, "en la región no han jugado limpio,"¹⁰ expresión que hace referencia a la creencia de que existen agendas secretas para el área, en la cual sus habitantes son sólo objetos disponibles y a los cuales no se les debe ninguna consideración.

En esta situación de desconfianza, no sólo frente al Estado, sino dentro de la misma sociedad, el trabajo del PDPMM ha sido difícil debido a esa ausencia de "capital social", definido como la capacidad para asociarse, para crear redes de solidaridad, confianza y reciprocidad, no sólo dentro y entre los miembros de los diferentes grupos sociales, sino entre los potenciales ciudadanos y las distintas organizaciones estatales. Esa capacidad para asociarse está relacionada con el desarrollo y el progreso económico, y tiene mucho que ver con la sinergia entre Estado y grupos de la sociedad, de la cual el PDPMM es un resultado relativamente exitoso. Sin embargo, el escepticismo que origina el conflicto armado es una barrera para la cooperación, y las perspectivas de recrudecimiento de aquél, al convertirse la región, y la misma ciudad de Barrancabermeja, en un territorio en disputa, demandarán una dosis mayor de optimismo y esfuerzo por parte del PDPMM.



CONCLUSIONES

Como se vislumbra en este artículo, no son pocos ni son fáciles los retos que tiene por delante el Programa. Se sostiene gracias a una gran red de apoyo que se ha construido desde abajo, desde las comunidades, la cual llega hasta las mismas agencias de cooperación internacional o la banca multilateral, pasando por agencias del Gobierno del orden nacional. Su experiencia es una muestra de las posibilidades, no exentas de dificultades y tropiezos, que brindan los ambientes en donde es posible la asociación y cooperación, y también es una crítica indirecta al funcionamiento del Estado colombiano y a los efectos de la forma como están organizados y operan los dos partidos tradicionales. De la misma forma, el PDPMM ha creado un espacio comunicativo y de acción que no sólo le disputa la creación de significados y de un marco de interpretación de los hechos a los diferentes niveles y organizaciones estatales, sino también a los grupos guerrilleros, por un lado, y a los paramilitares y autodefensas, por el otro. Como se dijo, se ha especializado en un juego a tres, y hasta más bandas.

Aún existen muchos interrogantes sobre su viabilidad real, no sólo en términos políticos, sino también en términos económicos. ¿Son posibles las iniciativas económicas del Programa en un entorno macroeconómico hostil y cada vez más globaliza-

do? ¿Es posible lograr cambios a ese nivel que hagan sostenibles esas iniciativas? La maduración de los proyectos irán planteando las dificultades a enfrentar. Igualmente, existe el temor de que el PDPMM se convierta en un intermediario del Gobierno y las agencias de cooperación internacional y financieras, en lugar de ser la voz de la región y de sus pobladores. Aunque esa tensión entre centro y regiones, y entre regiones y el entorno internacional siempre va a estar presente, un régimen político más amplio, con mayor participación y democracia para las regiones y sus pobladores haría las dificultades menos gravosas. Si bien el Programa ha contado con el apoyo de diferentes niveles y organizaciones del Estado, lo mismo que con simpatizantes influyentes dentro y fuera del país, las dificultades futuras van a requerir más que eso. Un orden político más democrático sería lo ideal. Ojalá que las negociaciones de paz hagan realidad esa necesidad.

.....



- 6 Romero, Mauricio (1998), "Identidades políticas, intervención estatal y paramilitares. El caso del departamento de Córdoba," en *Controversia* # 173, Cinep.
- (1995), "Transformación rural, violencia política y narcotráfico en Córdoba, 1953-1991," en *Controversia* # 167, Cinep.
- 7 De Roux, Francisco (1996), *Documento Central de Diagnóstico, Conclusiones y Recomendaciones, Programa de Desarrollo y Paz en el Magdalena Medio, PDPMM*.
- 8 Castells, Manuel (1996), *La era de la información. Economía, sociedad y cultura. El poder de la identidad*, vol. 2, Alianza Editorial.
- 9 Americas Watch (1994), *Estado de guerra. Violencia política y contrainsurgencia en Colombia*, TM Editores-Iepri-CEI.
- 10 Expresión de un líder regional para referirse a la forma de intervención del Estado central en la región, Barrancabermeja, abril de 1999.